

# ***Bolivia: causas de su inestabilidad política***

**H. C. F. Mansilla**

---

**H.C.F. Mansilla.** Cientista político boliviano. Maestría en Ciencias Políticas y Doctorado en Filosofía en la Universidad Libre de Berlín. Estudios de postgrado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt am Main. Fue profesor en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Ha publicado, entre otros títulos: "El Fascismo y la Sociedad Unidimensional"; "Problemas de la Tercera Vía"; "El Reformismo Sudamericano".

---

## ***Las pautas de comportamiento y la política en Bolivia***

Los sucesos derivados de los golpes de Estado militares de noviembre de 1979 y julio de 1980, con sus extrañas alianzas y disensiones, sus piruetas ideológicas y sus maniobras inesperadas sugieren la conclusión de que el quehacer político en Bolivia no está determinado exclusivamente por la actividad típica de los partidos y de los grupos de presión y por la pugna de las diversas corrientes de opinión, sino también por pautas de comportamiento de carácter menos racional y manifiesto. Las traiciones repentinas y el anhelo generalizado por el poder, de un lado, y la lentitud de la administración pública junto con la ineficiencia usual, de otro, apuntan paradójicamente hacia el mismo fenómeno, que permanece relativamente poco dilucidado: el predominio de iguales formas colectivas de índole preconsciente entre los partidarios de las tendencias políticas disímiles, normas que conforman un genuino acervo nacional y que, en el fondo, no fomentan el establecimiento de la democracia en el país.

Las pautas que rigieron durante la década 1970-1980 estaban profundamente arraigadas en la tradición anterior y no representaban un cambio substancial con respecto a ésta. Lo que no implica que no se hayan dado varias alteraciones secundarias que a la larga vayan modificando paulatinamente los modelos del comportamiento político. En este campo es donde se podrían localizar algunos cambios que probablemente tendrán lugar durante la década 1980-1990 y que consistirían en una ideologización creciente del debate político y en el surgimiento de estructuras partidarias semejantes a las de los países más evolucionados del área latinoamericana.

## ***La situación prevaleciente en Bolivia***

Lo que llama primeramente la atención es el hecho de que en la esfera política los individuos actúan según criterios que se contradicen entre sí o que provienen de los orígenes más diferentes. Militantes de los partidos de izquierda apoyan golpes de Estado militares, miembros de la alta burguesía encabezan grupos radicales de izquierda, parlamentarios coadyuvan al desmantelamiento del poder legislativo y algunos círculos militares son claramente proclives a un gobierno civil.

Los hombres actúan también de acuerdo a normas preconscientes y prelógicas, y no siempre según motivaciones ideológicas, argumentos racionales, prescripciones impuestas por los partidos o, sencillamente, de acuerdo a criterios que correspondiesen a su estado social. Muchas veces las decisiones se toman siguiendo viejos anhelos del subconsciente, valores colectivos de carácter arcaico e irracional y nostalgias alimentadas por oscuras tradiciones.

Con respecto al caso boliviano, se advierte la inadecuación y la inutilidad del famoso teorema marxista sobre la relación entre la base económica y la superestructura política, institucional e ideológica. El comportamiento político de hombres y grupos está determinado sólo en proporción reducida por consideraciones derivadas de procesos y necesidades económicas; en el modelo marxista, además, tiene cabida únicamente el plano racional-consciente. En Bolivia, sin embargo, tanto las decisiones como las normas de comportamiento se nutren de las fuentes del preconsciente colectivo, de la existencia de entendidos prejuicios sociales y de la pervivencia de principios atávicos, que se entremezclan con las racionalizaciones habituales derivadas de la vida económica, dando como resultado un cuadro muy complejo de las actitudes socio-políticas, que no puede ser interpretado mediante las categorías reduccionistas tan en boga en los medios de la izquierda boliviana.

El caso boliviano presenta tantas incongruencias y sorpresas, las cuales emergen a la superficie en épocas de crisis y desórdenes, que sólo un estudio multidisciplinario podría esclarecer su complicada dinámica social, donde se combinan las controversias habituales entre las diversas corrientes políticas con las metas del preconsciente colectivo y con las ansias más irracionales de los individuos involucrados en los procesos políticos.

### ***Las corrientes y los valores determinantes del comportamiento social***

Aún no existe un estudio exhaustivo y empíricamente asegurado acerca de los criterios y valores de orientación que prevalecen en las comunidades indígenas del país. Si bien la organización tradicional de éstas contiene aspectos originales y antropológicamente interesantes, parece que no han desarrollado modelos democráticos de solución de conflictos y de discusión de alternativas que vayan más allá de límites regionales muy estrechos y de problemas elementales de la vida cotidiana, conservando mas bien formas jerárquicas de estructuración social y parámetros autoritarios de socialización. La tradición incaica, por lo menos, no co-

noció procesos decisorios con participación de las bases ni ningún mecanismo que permitiese la articulación institucionalizada de los intereses de los estratos inferiores y minorías de todo tipo.

El ordenamiento social se basaba en la obediencia de los de abajo y en el derecho casi ilimitado a mandar de los de arriba. Esto no quiere decir, evidentemente, que no haya habido monarcas esclarecidos y épocas relativamente libres del despotismo oficial, pero el régimen era, en su esencia, absolutista - tal como es su herencia hasta nuestros días.

A esta tradición se sobrepuso el modelo dominacional hispano-católico, que no desplazó del todo las normas indígenas y hasta enfatizó algunos de sus componentes. En el universo europeo, España no se destacó nunca por un espíritu liberal, por la creación de organismos políticos de representación popular o por innovaciones en el campo del pensamiento socio-político. A una tradición autoritaria le siguió otra con elementos francamente totalitarios, sancionados y justificados mediante el instrumento de una religiosidad intolerante, que permeaba todos los aspectos de la vida civil y cuyas consecuencias han permanecido en vigor hasta hoy dentro de las diversas facetas de la mentalidad colectiva boliviana.

Uno de los rasgos más notables de la herencia hispano-católica es la propensión al irracionalismo. Criterios racionales - como ser la adecuación de los medios a los fines - no son predominantes ni en la actuación social ni en el debate político, donde aún es decisiva la invocación de las pasiones, los prejuicios y hasta de los instintos. Más aún: las connotaciones emotivas, la reiteración de las místicas revolucionarias o nacionales y el énfasis en los sentimientos tienen un carácter visto como muy positivo por la inmensa mayoría de la comunidad boliviana - y unos efectos prácticos correspondientes. Casi todos los discursos de los dirigentes políticos y el estilo general del debate público se basan ciertamente en imágenes y figuras referidas al nivel sentimental y a las capas prelógicas de la conciencia; en esto no se pueden advertir diferencias básicas entre reaccionarios y revolucionarios. A ambos les falta la argumentación fundamentada en datos empíricamente verificables, sostenida por una concatenación racional de los enunciados y presentada a la opinión pública como una alternativa de valor relativo y, por lo tanto, discutible. La verdad no surge del sopesar analítico de varias posibilidades, sino que es el bien que siempre ha poseído el líder o el partido que tiene la palabra. No se trata, consiguientemente, de convencer a los otros por el mejor raciocinio, sino de imponerles demagógicamente el camino y la solución "correcta".

Otra característica de esta tradición es el activismo: la tendencia a sobrevalorar la acción por la acción y a considerar la reflexión teórica como su mero ornamento contingente. Guerrilleros de izquierda y golpistas de derecha emprenden en todo caso la operación y luego - tal vez - piensan en su alcance y en sus consecuencias.

Tampoco se puede pasar por alto el machismo y el caudillismo, frutos de la tradición ibérica que en el Nuevo Mundo han florecido con inusitado vigor. El menos-

precio de la mujer es sólo un aspecto de una actitud más amplia que denigra a aquellos que supuestamente son débiles y que se desvían de la norma establecida; es, en el fondo, la negativa a aceptar posiciones divergentes, la exaltación de un dominio irrestricto pero sencillo y el anhelo de ejercer la potestad aunque sea dentro de la estrechez familiar. La fuerza del caudillismo ha residido en la abolición de instancias intermedias propias de la democracia representativa, situadas entre el poder central y la mayoría de la población, y en la posibilidad de identificación que ofrece la figura del gobernante fuerte y absoluto a la masa de súbditos de espíritu gregario e individualidad débil. Los resultados del caudillismo han sido la obstaculización del pluralismo democrático y la falta de respeto a los derechos ciudadanos.

Otros elementos de esta herencia son la tendencia al estatismo y la proclividad al burocratismo. Contrariamente a la tradición británica y a otras, España legó un Estado poderoso, centralizador y absorbente, al que corresponden organismos provinciales y municipales sin legitimidad propia (sino derivada del gobierno central), sin autonomía y sin peso en la vida política de la nación. Por otra parte, no se ha podido desarrollar una tradición de iniciativas eficientes a nivel de comunas y grupos: todo se lo espera del gobierno central, desde la construcción de caminos hasta ayuda en caso de inundaciones, y de todas las calamidades se lo culpa a él, como si el Estado fuese responsable por todo el acontecer dentro de un país.

La burocracia se distingue tanto por su amplitud como por su ineficacia: innecesariamente engloba y "regula" innumerables actos de la vida social, dificultando las faenas diarias y alimentando una casta de funcionarios inútiles y arrogantes. La tradición burocrática está, empero, profundamente arraigada en la mentalidad boliviana: los más diversos gobiernos han competido por crear más instancias administrativas y más trámites, mientras que a ningún partido se le ha ocurrido como postulado programático la reducción del fenómeno burocrático. Que ambos sucesos no sucedan con plena conciencia, sino mas bien como asuntos obvios, muestra hasta qué grado se ha internalizado colectivamente los valores de esa lamentable tradición.

Finalmente hay que mencionar la pervivencia de ciertas normas sociales que rebasan también las fronteras de los diferentes estratos y que afectan la vida cotidiana en las ciudades: la inclinación a sobrestimar las apariencias en detrimento del ser y la dicotomía entre el nivel verbal y el real, de acuerdo a viejos cánones hispánicos, no explicitados teóricamente, pero de total validez en la praxis, el valor de una persona o de un grupo no reside en sus cualidades intrínsecas, sino en sus manifestaciones externas y, sobre todo, en el dictamen de la opinión pública local. Un trabajo honrado pero silencioso es visto como inmensamente inferior al éxito público, pero de dudoso origen. Su fundamento no importa gran cosa, pues la mentalidad colectiva tiene mala memoria y se deja guiar por fenómenos superficiales, tales como la moda del día, el renombre pasajero y la fortuna adquirida fugazmente. A esta concepción del éxito están dedicados igualmente los esfuer-

zos de los políticos. Tal exaltación de lo casual y exterior crea la atmósfera ideal para el desenvolvimiento de la hipocresía, la deslealtad y la ambición desmedida. La distancia entre lo que se dice y lo que se hace es el corolario lógico de esta moral deplorable que regula una gran parte de la actividad política. Muchas informaciones no transcurren por canales serios y verificables, sino por medio de la intriga y el rumor. Los criterios políticos se forman, hasta en las más altas esferas, a base de elementos muy ambiguos, empíricamente inseguros y éticamente reprochables.

Naturalmente que influencias modernas han ido conformando asimismo las pautas generales de comportamiento en los últimos tiempos. La modernización de las estructuras económicas y la incipiente industrialización del país han contribuido a introducir normas más racionales, menos emotivas y más cercanas a aquellas que rigen en las sociedades altamente avanzadas. Estos parámetros de comportamiento han florecido, sin embargo, casi exclusivamente en el campo profesional en el mundo de los negocios y en la esfera de la producción urbano-industrial, pero no se han extendido al terreno de la política y al de los valores sociales prevaletentes.

La importación de temas marxistas y su aplicación a la problemática del cambio social han causado evidentemente una cierta modernización del quehacer político, en especial desde su propagación masiva a partir de 1967. Estas tendencias de origen nacionalista han estado mezcladas desde el primer momento con las pautas convencionales de comportamiento, dando como resultado una amalgama de anhelos y objetivos fuertemente enraizados en las tradiciones del país, pero recubiertos con el barniz de la moda ideológica y legitimizados por una metodología aparentemente científica. La mayor contribución del marxismo a la política boliviana residiría más bien en los modelos organizativos: la concepción leninista del partido permitió dar un carácter contemporáneo y tecnocrático a clásicas estructuras jerárquicas y autoritarias, facilitando la cohesión social y la conductibilidad de las masas en nombre de un principio revolucionario. En un miniuiverso como el boliviano, donde el desorden es proverbial, los intentos de disciplinar férreamente un partido político aparecen como un fenómeno ejemplar y progresista.

### ***La década 1970-1980***

Estas líneas generales de evolución socio-política deben ser concretizadas y relativizadas a la luz de los sucesos acaecidos entre 1970 y 1980. Esta década se ha caracterizado en Bolivia por una cierta exacerbación de las pasiones políticas y por una clara urgencia en los anhelos de desarrollo económico. Pero esta intensificación del quehacer político no ha generado lamentablemente ninguna concepción original ni acerca de las formas sociales de convivencia ni acerca de los modelos del desarrollo acelerado.

Las corrientes conservadoras, que ejercieron el poder en la mayor parte de esta década, gobernaron en la manera más convencional posible, es decir, suponiendo que la fuerza armada sirve para solucionar todos los problemas. A pesar de algunos anuncios programáticos, no se pudo descubrir en qué consistiría la originalidad específica del largo período militar. La combinación de un caudillismo no muy carismático con un estilo administrativo totalmente tradicional no produjo ningún modelo de desarrollo que se pudiera calificar de diferente. El crecimiento económico, que tuvo lugar en un ritmo nada despreciable, se caracterizó empero por ser meramente cuantitativo, y no tuvo, por lo tanto, ninguna repercusión positiva sobre las pautas de comportamiento. Por otra parte, las diversas fracciones de la oposición no lograron tampoco formular un paradigma de desarrollo viable, genuinamente propio y realista, limitándose también a la repetición de viejas consignas, pero esta vez con un aumento cuantitativo en su propaganda y en la magnitud de las audiencias alcanzadas.

Esta era de enriquecimientos repentinos, de represión sindical y de ausencia de derechos políticos tuvo la virtud de potenciar algunas normas de comportamiento de índole francamente regresiva. La dificultad de expresarse libremente en público, la falta de una instancia fiscalizadora efectiva y la introducción masiva de un consumismo vulgar condujeron a rebajar aún más la estimación colectiva del trabajo honrado - que nunca fue demasiado alta en la tradición ibero-católica - y a enfatizar el alto valor de los enriquecimientos ilícitos. Este desarrollo llevó igualmente a diluir aún más la prevalencia de ciertos principios morales, como el respeto a la legalidad, el reconocimiento de los méritos intelectuales y artísticos, la consideración a las minorías, el carácter positivo de la honradez, la laboriosidad, la lealtad y la madurez cívica. En general, el régimen militar no hizo nada por el fomento de estos valores éticos tradicionales ni por la introducción de paradigmas de comportamiento de corte moderno - como la actuación regida por la eficiencia y la rentabilidad -, sino que se limitó indirectamente a hacer prosperar las virtudes típicas de un orden envilecido y manejado por la mentalidad de los nuevos ricos: corrupción administrativa irrestricta, transgresiones a la propia legalidad como asunto cotidiano, desenfreno por el enriquecimiento veloz, desinterés por la cultura y desprecio por los derechos ciudadanos. No se inventó nada nuevo, en verdad, pues todos estos procesos tenían profundas raíces en la herencia nacional, pero se les suministró un tinte de modernidad y legalismo.

La oposición izquierdista persistió en sus cánones del inmediatismo y del activismo a ultranza, sin llegar a alcanzar una decisiva movilización social y sin formular un modelo coherente y realista de alternativa política. Ella también dio repetidas muestras de intolerancia, dogmatismo y poca comprensión por una democracia genuina. Su intento principal era el de suplantarse el régimen militar por el propio: la inmensa propaganda revolucionaria, las letanías marxistas y las imágenes del cambio social se revelaron como el mero ornamento de una contra-élite ávida de alcanzar el poder. Los sucesos de 1979 y 1980 demostraron que algunos de sus principales exponentes eran los más fieles seguidores de las normas convencionales, fascinados como tales por el poder y sus privilegios. Con algunas y notables

excepciones, la oposición de izquierda es esencialmente paternalista, suponiendo que posee la solución adecuada a los problemas nacionales y que es su obligación el imponer la línea "correcta" a las masas de sus seguidores y al país en su conjunto. Finalmente, la gran mayoría de los grupos de izquierda tiene tan poco respeto como la derecha por los procedimientos democráticos; el adversario político no es considerado como el representante válido de otros intereses sociales y de otras concepciones políticas, sino como el enemigo más o menos irreconciliable que encarna ideas perversas y una posición moralmente abyecta. Tampoco ellos tienen la capacidad de conformar una oposición responsable y razonable.

Fuera del campo de las pautas de comportamiento social, se puede constatar que las corrientes políticas más disímiles tienden a orientarse a largo plazo por objetivos muy semejantes, aunque difieran en la cuestión relativa a los medios para alcanzar su consecución. Todas ellas comparten una misma idea positiva en torno al progreso material y a los modelos de consumo masivos, que tienen su origen en la civilización occidental; además consideran que la industrialización acelerada, la modernización de toda la sociedad y el fortalecimiento del Estado nacional son metas rectoras que sirven para conducir, controlar y medir el proceso de desarrollo económico y social.

### ***Las perspectivas para la década 1980-1990***

La liberalización de la escena política, el llamamiento a elecciones y la instauración del parlamento ofrecen a primera vista una buena oportunidad para reintroducir normas democráticas y racionales en la comunidad boliviana. Este postulado teórico choca en la praxis, sin embargo, con innumerables dificultades, las que han salido a la luz en el breve tiempo transcurrido desde la terminación del régimen militar y que arrojan sus sombras sobre la evolución de la próxima década.

Los principales obstáculos a un verdadero progreso en el ámbito político siguen siendo considerables: la pervivencia de pautas autoritarias e irracionales en las capas profundas de la mentalidad colectiva y el bajo nivel socio-económico del país, el cual, debido a la urgencia por el desarrollo, fomenta la implantación de modelos poco democráticos.

En cuanto al primer punto, las normas derivadas de las tradiciones indígena e hispano católica, a pesar de hallarse en un lento proceso de desplazamiento por parte de parámetros modernos y tecnicistas de orientación, han mantenido su facultad de influir decisivamente en el comportamiento político, lo que probablemente no variará substancialmente durante los próximos diez años. Los sucesos acaecidos sólo durante el año 1979 y el breve funcionamiento del parlamento parecen indicar que la élite política sigue obligada hacia las pautas convencionales ya señaladas y que no hay motivo para esperar un cambio de esta situación en lapsos breves.

Fundamentalmente sigue vigente la inmensa importancia de la gratificación pública y del prestigio otorgado por las apariencias en detrimento de valores intrínsecos. La concepción del deber y la estima por el trabajo honrado están totalmente subordinadas a los criterios del prestigio exterior, lo que se advierte de modo claro en la nada casual continuidad del oficio del "político": los dirigentes no son estadistas que pasan las noches estudiando datos y actas y los días analizando el pro y el contra de las medidas a tomar, y que llegan a ejercer funciones importantes después de una larga vida en beneficio de la comunidad, sino son sujetos ávidos de honores rápidos y de prestigio fácil, que malgastan su tiempo en "reuniones" y que adquieren recién sus "méritos públicos" en el desempeño mediocre e irresponsable de los más altos cargos. La gratificación social se seguirá derivando del usufructo del poder - y no del servicio en el gobierno, como lo indicó Jesús Urzagasti -, perpetuando posiblemente en las altas esferas a una casta de gente con escasa formación profesional y moralidad ambigua, pero con desproporcionadas ambiciones.

Consiguientemente, el renombre y el atractivo del poder ejecutivo son mucho más grandes que los que irradia el parlamento. Los legisladores tienen una opinión implícita no muy elevada del "primer poder del Estado": lo consideran como mero puente para cargos ministeriales o como una tribuna para acrecentar su reputación popular. El parlamento tiende a limitarse a una de sus funciones, a la más exterior y publicitada: la fiscalización del poder ejecutivo. Los diputados se lucen en severas interpelaciones al gobierno, encontrando siempre algo muy censurable en sus acciones. Pero cuando los mismos parlamentarios son nombrados ministros, reproducen en la praxis lo que ellos habían criticado anteriormente, sin advertir la incongruencia. Probablemente no tienen ideas propias y autónomas sobre el arte de gobernar, sino que se dejan dictar los criterios de actuación por la función que ejercen casualmente en un determinado momento. Tampoco el trabajo en detalle, la labor cotidiana en las comisiones especializadas y la elaboración de complejas leyes - tan necesarias en la era contemporánea dominada por la tecnología - conforman la actividad central del parlamento; esta tarea esencialmente legislativa parece haber pasado definitivamente a la burocracia del ejecutivo. Este proceso se intensificará seguramente en los próximos años, siguiendo las pautas perceptibles de todo el mundo.

Lo que perdurará también será la atmósfera generalizada de hipocresía y ambigüedad, la distancia entre lo verbal y lo real y la falta de un diálogo abierto y racional, en el cual los participantes tengan la facultad de ponerse a veces en el lugar del otro y aceptar un cuestionamiento de sus propios principios. Por de pronto, la crítica analítica desapasionada no goza del favor público, en contraposición a la popularidad que tienen el de nuestro grosero o la alabanza hueca. A nadie le gusta que se pongan las raíces mismas de la comunidad en tela de juicio, prefiriendo imágenes embellecidas sobre tales orígenes. Si se reconoce algo negativo, esto es lo exterior, contingente y temporal - como la influencia imperialista -, pero nunca las bases de la nacionalidad. Esta falta de espíritu genuinamente crítico no



podrá ser subsanada fácilmente en la próxima década y contribuirá a la mantención del actual estado de cosas.

Tal vez sean otros problemas más agudos los que dominen en los próximos años, modificando las pautas de comportamiento hacia lo imprescindible e inmediato y dificultando aún más la superación de muchas formas inhumanas e irracionales: la crisis económica generalizada, la carestía de muchos recursos importantes y la simple lucha por una supervivencia cada vez más difícil tendrán su repercusión en un comportamiento político más duro y menos proclive a la democracia y al pluralismo.